



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05001-31-05-007-2019-00779-01
Demandante	Luis Alfredo Rojas Puerta
Demandado	Sociedad de Activos Especiales y Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia
Vinculada	Protección S.A.
Asunto	Apelación auto excepción previa
Procedencia	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Falta de Competencia por indebido agotamiento de la reclamación administrativa

Medellín, agosto (treinta) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S, contra el auto proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 06 de abril de 2022, mediante el cual se declaró impróspera la excepción previa de falta de competencia por indebido agotamiento de la reclamación administrativa.

1.- ANTECEDENTES

El señor LUIS ALFREDO ROJAS PUERTA, llamó a juicio ordinario laboral a las sociedades COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. MEPRECOL S.A. y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE, pretendiendo que se declare la existencia de un contrato realidad celebrado con MEPRECOL S.A. vigente entre enero de 2009 y el 15 de octubre de 2018, se condene a la misma a pagar al demandante los salarios del 01 al 15 de octubre de 2018; las cesantías; los intereses a las cesantías; las primas de servicio cotizaciones a pensión y las vacaciones, por todo el tiempo laborado, así como la sanción por el no pago de cesantías e intereses, la sanción del numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías; la indemnización por falta de pago del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo; la indemnización por despido sin justa causa; la sanción del párrafo del artículo 29 de la ley 789 de 2002, el reintegro de las sumas cotizadas a salud y pensiones y la indexación.

Notificada la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. replicó el libelo demandatorio, se opuso a las pretensiones y formuló como excepción previa la “falta de reclamación administrativa”, aduciendo que conforme al artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es necesario realizar una solicitud previa a la entidad de la administración pública de la cual se pretenden reclamaciones laborales antes de hacerla comparecer a un proceso judicial de esta naturaleza

Agrega que la sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., es una sociedad de economía mixta del orden nacional, descentralizada y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a su vez es la administradora del fondo sin personería jurídica (FRISCO) Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, de conformidad con el artículo 90 de la

Ley 1708 de 2014, la cual tiene una participación estatal del 99% en la conformación de su capital y por tanto, con mayor razón, ha de ser considerada como una entidad estatal.

Afirma que las pruebas allegadas al proceso, se establece que la reclamación administrativa no fue solicitada ante su representada y no ha sido aportada en este proceso, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada, ante la ausencia del requisito de procedibilidad y desvinculada la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.

2.- AUTO RECURRIDO

En audiencia llevada a cabo el 06 de abril de 2022, el Juzgado de conocimiento, declaró impróspera la excepción previa, argumentando que el 9 de mayo de 2019, el demandante presentó solicitud ante la comercializadora demandada y para la fecha la Sociedad de Activos Especiales ya ejercía el secuestro de la misma y que los recursos de los que se asumirá el posible pago de una condena de acreencias laborales serán de la Compañía Minera no del patrimonio de la Sociedad de Activos Especiales, resaltando que el derecho de petición enviado el 9 de mayo de 2019 a folio 975, tiene como destinatario el representante legal y depositario provisional designado por la SAE y se abstuvo de condenar en costas.

Decisión ratificada en el recurso de reposición, agregando que la petición ante Meprecol se presentó el 9 de mayo de 2019 y la Sociedad de Activos Especiales tomó en diligencia de secuestro a Meprecol el 28 de noviembre de 2017, por lo que la petición era conocida por la Sociedad de Activos Especiales, y establecer una exigencia de formular reclamación directa a la SAE, es un formalismo excesivo

3.- APELACIÓN

El apoderado de la codemandada Sociedad de Activos Especiales, presentó recurso de apelación en forma subsidiaria, argumentando que las pretensiones dirigidas en contra de la SAE y en el caso en concreto, no se agotó la reclamación frente a la misma, además no pueden confundirse la naturaleza de las entidades demandadas al ser personas jurídicas diferentes.

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

La apoderada de la parte actora, presentó alegatos reiterando el cumplimiento del requisito legal conforme al derecho de petición obrante a folios 975 del expediente, agregando que para esa fecha y ante quien se dirigió la reclamación era el representante legal de esta sociedad, es decir, el depositario provisional nombrado por la misma SAE S.A.S., el 28 de noviembre de 2017 con la toma de posesión, es este depositario quien ejercería administración de esta empresas desde su secuestro, resulta entonces probado que la reclamación era de evidente y pleno conocimiento por la SAE S.A.S., como quiera que el depositario está obligado a comunicar todas sus actuaciones a quien le designó y de esta manera la excepción propuesta con esta reclamación fue saneada.

Aduce que la excepción alegada por la SAE S.A.S. no tendría asidero legal, por ser contrario al ordenamiento jurídico, como quiera que indicar que como consecuencia de la medida cautelar, los trabajadores de la empresa C.I. MEPRECOL S.A., que nada tienen que ver con algún proceder de sus empleadores, para hacer valer sus derechos deben agotar requisitos de procedibilidad frente a la SAE, es desconocer que una sociedad vinculada a un proceso de extinción de dominio, en los términos de la Ley 1708 de 2014, sigue activa en el mundo jurídico y en el mundo económico, sigue siendo persona jurídica, sujeto de derechos y obligaciones, añade que C.I. MEPRECOL S.A., aún existe y no es solo un bien, es una unidad productiva que sigue en funcionamiento con empleados, asesores, recursos por ventas, de hecho, ha tenido ingresos por su actividad de comercialización por \$1.138.175.287.000.

En suma aduce que La SAE debe continuar como codemandada por ser la entidad no solo que administra los bienes del Frisco, sino por ser: (i) Quien nombró a través de la Resolución 1593 de diciembre 21 de 2017 al Dr. Garrido como depositario provisional de la C.I. Meprecol S.A. (ii) Quien fija los honorarios del depositario provisional (iii) Es a quien el depositario le rinde cuentas de su gestión, tal como consta en el acta # 22 de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 9 de marzo de 2018, la cual reposa en la Cámara de Comercio de Medellín en el Registro Mercantil el cual es de acceso público. (iv) Es el destinatario de los informes de gestión que debe generar el Dr. Garrido en cumplimiento de sus obligaciones tal como lo establece la “metodología para la administración de bienes del Frisco”:

Por su parte la apoderada de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A., manifestó que como quiera que el recurso presentado por la Sociedad de Activos Especiales, objeto de traslado de alegatos, no tiene una implicación directa frente a los intereses de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A., se atiene a lo que se decida.

5.- CONSIDERACIONES

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

5.1.- Problema Jurídico

¿Debe revocarse el auto proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 06 de abril de 2022, por medio del cual declaró impróspera la excepción previa de falta de competencia por indebido agotamiento de la

reclamación administrativa respecto a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.?

5.2. Tesis

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis, según la cual no se acredita el agotamiento de la reclamación administrativa respecto a la sociedad de Activos Especiales S.A.S. y por lo tanto debe declararse probada la excepción de falta de competencia por indebido agotamiento de la reclamación administrativa, no obstante, no es posible la desvinculación de la referida sociedad del proceso por ser la administradora de la totalidad de las cuotas sociales, debiendo mantenerla vinculada como tercero interesado, litisconsorte facultativo, para efectos de la oponibilidad de la sentencia.

5.3.- Premisas Normativas

El artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y la S.S. dispone:

“Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.”

La Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2006, al estudiar el aludido artículo, precisó lo siguiente:

“En el artículo 6° del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para acudir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la

jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa.”

Frente a este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte suprema de justicia en sentencia SL Rad 37251 del 7 de febrero de 2012, explicó las dos formas en que la misma se entiende agotada

«El artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación introducida por el artículo 4° de la Ley 712 de 2001, señala como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, la previa reclamación administrativa consistente en el simple reclamo escrito del pretendiente sobre el derecho, la cual se entiende agotada cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta. Como se observa, para que se entienda la eficacia de la reclamación, la ley procesal laboral ha dispuesto dos momentos claramente diferenciables, el primero, cuando se haya decidido, es decir cuando la Administración responde la reclamación, evento que supone, si el pronunciamiento contempla la posibilidad de impugnarlo a través de los recursos de la llamada vía gubernativa, que esa decisión quede en suspenso hasta cuando tales recursos sean decididos definitivamente, instante desde el cual puede afirmarse que se ha agotado la reclamación. El segundo, que se materializa cuando transcurrido un mes desde la presentación, la reclamación no ha sido resuelta. Naturalmente, como dicha figura tiene como actor a quien pretenda el derecho, debe ser el mismo quien tenga la opción de escoger uno de los dos eventos reseñados, es decir, que puede esperar a que la Administración se pronuncie, recurrir esa decisión cuando ello sea posible y esperar que los recursos sean resueltos definitivamente, o bien esperar que transcurra el mes.”

La reclamación administrativa, además de ser un requisito de procedibilidad de la acción, también es un factor de competencia del juez del trabajo, de modo que cuando la demandada sea la Nación, las entidades territoriales o cualquiera otra entidad de la administración pública, no puede el Juez conocer del asunto sin que se haya previamente agotado la reclamación, así lo recordó la citada Corporación, en sentencia SL8603 de 01 de julio de 2015 *«Al respecto, esta Sala de Casación Laboral ha adocrinado que la reclamación administrativa constituye un factor de competencia del juez del trabajo cuando la demandada sea la Nación, las entidades territoriales o cualquiera otra entidad de la administración pública, como lo es el ISS. En efecto, en sentencias CSJ SL, 13 oct 1999, Rad. 12221 y CSJ SL, 23 feb 2000, Rad. 12719, entre otras, la Corte adocrinó: (...) "Significa lo anterior que mientras no se haya agotado dicho trámite, el juez del trabajo no adquiere competencia para conocer del asunto. La importancia de realizar la reclamación administrativa con anterioridad a iniciar la acción contenciosa radica en la posibilidad que la Ley le otorga a la administración pública de revisar sus propias actuaciones antes de que estas sean sometidas al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, de modo que la falta de esta reclamación con anterioridad a la instauración de la demanda es insubsanable».*

De lo anterior deviene claro que el agotamiento de la reclamación administrativa es un requisito de procedibilidad de la demanda.

5.4. Caso concreto

Para resolver el problema jurídico planteado en este asunto, inicialmente se revalida que, en efecto, la sociedad de Activos Especiales SAE, según la previsión del artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, es una *“sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad”* En adición a los

anterior, la citada sociedad, tiene una composición accionaria del 99.9%. de capital público y el 00.1 de capital privado.

El artículo 97 de la Ley 489 de 1998, define las sociedades de economía mixta como organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.”

En este contexto es menester diferenciar la naturaleza pública de la entidad del régimen privado al cual está sometida en su actuación en el mercado, como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), régimen propio de las sociedades de economía mixta, subrayando que el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social antes citado al consagrar el requisito de agotamiento de la reclamación administrativa como exigencia de procedibilidad de la acción laboral respecto a las entidades públicas, hace referencia a la naturaleza pública de misma y no al régimen que le sea legalmente aplicable, atributo que es indiscutible en este asunto respecto a la SAE.

En este mismo sentido debe precisarse que la SAE funge como administradora de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A., dado que el 100% de las cuotas sociales, fueron objeto de medida cautelar ordenada por la Fiscalía 21 de Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá, quien ordenó el inicio de la acción de Extinción del Derecho de Dominio, incautando la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A., sociedad entregada al señor NESTOR MAURICIO GARRIDO POLANCO, en calidad de Depositario Provisional.

Debe subrayarse que la parte demandante vinculó como extremo pasivo de la relación procesal a la SAE, y si bien las pretensiones se formulan en contra de la comercializadora, la apoderada del promotor del proceso vincula a la sociedad pública como codemandada y obligada al pago de las pretensiones en contra la Comercializadora, al exponer que la SAE es la administradora de las cuotas sociales del ente societario y expresamente señaló al cumplir los requisitos para la admisión de la demanda, folios 101 a 103 del documento 03. ExpedienteParte3, *“La SAE es codemandada y ruego al Despacho que en esos términos sea admitida la demanda”* razón por la cual refulge palmario la pertinencia del agotamiento de la reclamación administrativa

En este asunto, la a quo, concluyó que el demandante acreditó el aludido requisito en virtud de haber presentado derecho de petición *“reclamando la prestación”* a la Comercializadora MEPRECOL S.A. el 09 de mayo de 2019, copia obrante a folios 975 del anexo 01.ExpedienteParte1, dirigido al depositario nombrado por la SAE, infiriendo de ello el conocimiento de esta última de la reclamación, considerando, además, que se incurre en un exceso de formalismo si se exige la reclamación directa a la entidad pública, amen a que los dineros con los cuales se pagaría una eventual condena son de la sociedad C.I. MEPRECOL S.A., planteamiento del cual se aparta la Sala por las siguientes razones:

En primer lugar, revisado el contenido del documento de folios 975 citado, dirigido a la Comercializadora, con el cual la a quo entiende agotada la reclamación administrativa se constata que no es acertada la lectura que la funcionaria hace del mismo, toda vez que no corresponde a la reclamación de los derechos pretendidos en este proceso, en los términos del artículo 6 ibidem, sino a una solicitud de información y expedición de copias, en la cual, textualmente, se indica:

“me permito solicitarle se dé respuesta de fondo, clara y precisa a este memorial por medio de la expedición de los siguientes documentos y certificaciones a mi favor:

- 1. Se certifique el tiempo de relación contractual que sostuve con la empresa C.I MAPRECOL S.A*
- 2. Se certifique la funciones y cargos que desempeñé durante la relación contractual con la empresa.*
- 3. Se allegue copia del o de los contratos que suscribí durante mi relación contractual con la empresa.*
- 4. Que se certifique cuál era la asignación dineraria que recibía mi persona por la prestación personal de mis labores en la empresa C.I. MEPRECOL S.A.*

En segundo lugar, si en gracia de discusión se considera que se trata efectivamente de una reclamación de los derechos deprecados, no se puede desconocer que la SAE y MEPRECOL S.A. son personas jurídicas distintas, como atinadamente lo argumenta la alzada y si bien la primera tiene a su cargo la administración de las cuotas sociales de la segunda, en virtud de la medida cautelar decretada en el proceso penal de extinción de dominio, al cual se hizo referencia, MEPRECOL S.A., pese a estar bajo cautela conserva su personalidad jurídica y no se ha declarado aún la extinción del dominio de la misma en forma definitiva en favor del Estado.

Igualmente, el depositario provisional de la sociedad, señor Néstor Mauricio Garrido Polanco, nombrado por la SAE, es una persona natural distinta a su nominadora, siendo quien actualmente representa legalmente a la Comercializadora

En este escenario procesal debe declararse probada la excepción previa propuesta y como consecuencia de ello, ordenarse la desvinculación de la SAE como demandada en la litis. No obstante, no es posible desvincularla del proceso, porque si bien no existe un litisconsorcio necesario (artículo 61 del C.G.P) y no se extienden a ella los efectos de la sentencia favorable a las pretensiones del actor, si existe una relación sustancial con la demandada

derivada de la administración que ejerce la SAE del 100% de las cuotas sociales, que le permite incluso decidir su enajenación, razón por la cual y para efectos de la oponibilidad de la sentencia a la persona jurídica pública, se mantendrá vinculada como tercero interesado, litisconsorte facultativa, en los términos del artículo 71 del Código General del Proceso.

Costas en esta instancia a cargo del demandante y en favor de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., se fijan agencias en derecho en la suma de \$500.000.

6.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE

PRIMERO: Se REVOCA el auto proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el día seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS ALFREDO ROJAS PUERTA, en contra de las sociedades COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. MEPRECOL S.A. y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE y en su lugar

- i) Se declara probada la excepción previa de falta de competencia por ausencia del agotamiento de la reclamación administrativa y en consecuencia se ordena la desvinculación de la Sociedad de Activos Especiales SAE como parte demandada en la Litis
- ii) Se ordena oficiosamente mantener vinculada a la Sociedad de Activos Especiales SAE, como tercero interesado, litisconsorte

facultativo, en los términos del artículo 71 del Código General del Proceso, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Se **CONDENA** en costas en esta instancia al demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$500.000, en favor de la SAE.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por ESTADOS, de conformidad con el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma electrónica por salubridad pública
(Art. 11 Deceto 491 de 2020)


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado

El presente auto fue notificado por estado No. 154 fijado en la secretaria de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 31 de Agosto de 2022

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario